

**JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (pp. 1-5)**

—

**JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT VALENCIANA (pp. 6-9)**

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada  
doctora de Dret Administratiu*

*Universitat Jaume I*

**Sumario:** 1. Explotaciones mineras: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1755/2015, de 15 de abril. 2. Contaminación acústica: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1705/2015, de 17 de abril. 3. Restauración de la legalidad urbanística: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2368/2015, de 4 de junio, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2375/2015, de 5 de junio.

## **1. Explotaciones mineras: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1755/2015, de 15 de abril**

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resuelve el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa Arenas Silíceas Nuestra Señora del Pilar (en adelante, ASPISA S. L.) en relación con la desestimación por silencio negativo por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del recurso de alzada interpuesto contra la denegación dictada por la Comisión Territorial de Urbanismo de la aprobación definitiva de un plan especial minero en el término de Fanzara.

En cuanto al objeto del recurso y sus pretensiones, nos interesa destacar las pretensiones vinculadas con la protección del medio ambiente. A tales efectos, se solicita la “nulidad o subsidiaria anulabilidad de la Evaluación Ambiental Estratégica realizada el 23 de marzo de 2010 sobre el citado Plan especial Minero”.

La Comisión Territorial de Urbanismo se basa, para la denegación de la aprobación definitiva, en el informe desfavorable de la Dirección General de Gestión del Medio Natural sobre la EIA y en el hecho de que el Plan Minero Especial afecta al PORN de la Sierra de Espadán por estar dentro de la denominada área natural de la zona de influencia (AN, ZI).

Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia, en el FJ 3.º, al abordar las cuestiones mentadas, destaca, en relación con el informe desfavorable de la DIA, que la extracción de áridos y tierras o la explotación de recursos naturales generan un grave problema ambiental, siendo por ello necesario controlar las explotaciones existentes, por una parte, y establecer el máximo control, por otra, de las nuevas autorizaciones con el fin de que dichas actividades sean compatibles con la conservación y mejora del estado de los recursos naturales, los ecosistemas y las especies a proteger. Y, en consecuencia, se establecerán limitaciones de usos del suelo —como es la extracción de áridos— en función de los valores ambientales que presenten las zonas afectadas por las actividades de extracción. Por ello, no solo hay que tener en cuenta si las extracciones afectan a

zonas incluidas en el ámbito del parque natural, sino también a otras zonas con un elevado valor forestal como es el área natural de la zona de influencia, que es el supuesto del presente caso. No obstante, a pesar de las argumentaciones anteriores y de la necesidad de hacer prevalecer la protección del medio natural, el Tribunal estima el recurso y considera que debe declararse la nulidad del artículo 67.2 del Decreto 218/1997, de 30 de julio, por el que se aprueba el PORN de la Sierra de Espadán, en el que se prohíbe específicamente la explotación minera en las zonas de amortiguación del Parque de la Sierra de Espadán, porque, aun siendo necesaria la prohibición de actividades mineras en la ZAI (Zona de Amortiguación de Impactos) y en la AN, no existe ninguna motivación o justificación que avale tal prohibición, de forma que el Tribunal entiende que estamos ante una norma arbitraria que merece la máxima sanción, esto es, la expulsión del ordenamiento jurídico.

Con todo, en su análisis, el TSJCV destaca que, según la nueva normativa, están prohibidas las actividades mineras en las áreas naturales y de regeneración del PORN, prohibición que afecta a las nuevas autorizaciones, si bien no a la empresa ASPISA, S. A., que cuenta con una concesión minera desde el año 1987, lo que efectivamente no la exime de disponer del correspondiente informe favorable respecto a la necesidad de contar con memoria de explotación y un plan de restauración adecuados, documentos de los que carece el Plan, por lo que el Tribunal solo estima parcialmente la pretensión de nulidad de la EAE y el Acuerdo de la Comisión Territorial, en relación con el citado artículo 67.2 del Decreto 218/1997, que es declarado nulo.

## **2. Contaminación acústica: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 1705/2015, de 17 de abril**

En la Sentencia 1795/2015, de 17 abril, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dilucida un caso —recurrente en la ciudad de Valencia— sobre el uso de los denominados “casales falleros”. Estos últimos son las sedes de asociaciones culturales y lúdicas cuyo objeto social es la organización de actividades relacionadas con las fiestas de las Fallas —y, por lo tanto, circunscritas a este período festivo—. El problema surge cuando estos “casales” se convierten en lugar habitual de encuentro y de ocio, lo que provoca numerosas molestias a los vecinos.

Debe destacarse que los ruidos ya fueron considerados en la Ley valenciana 3/1989, de 2 de mayo —derogada actualmente por la disposición derogatoria única 2 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental—, como un factor determinante que afectaba al medio ambiente, de manera que con aquella norma se pretendía regular la convivencia armónica con un medio ambiente adecuado, por lo que se establecía, como requisito para desarrollar cualquier actividad contemplada en la ley, la obtención de la preceptiva licencia. En efecto, el medio ambiente urbano tiene como uno de sus principales factores de contaminación el ruido; por eso se hace necesaria la intervención de los poderes públicos, en este caso del Ayuntamiento, para limitar y condicionar su producción.

El TSJCV, tras considerar que no concurre la causa de inadmisión alegada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, analiza, en este caso, la inactividad de la Administración, la cual, a pesar de las reiteradas denuncias de los interesados, no realiza las oportunas actuaciones destinadas a proteger la tranquilidad del domicilio que contempla el artículo 18 CE. Y destaca, en concreto, jurisprudencia anterior como la Sentencia del TSJCV 1377/2008, de 18 de septiembre, en la que se sigue la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, y que señala que “con la falta de corrección de los ruidos no se protege un medio ambiente adecuado como impone el art.45.1 de la CE”.

### **3. Restauración de la legalidad urbanística: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2368/2015, de 4 de junio, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 2375/2015, de 5 de junio**

En este período han sido varias las sentencias del TSJCV relativas a la restauración de la legalidad. De entre ellas, destacaremos las que siguen.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dirime, en la Sentencia 2368/2015, de 4 de junio, sobre el recurso contencioso-administrativo presentado por el demandante ante una orden de restauración de la legalidad urbanística referida a una vivienda unifamiliar de madera que no contaba con la preceptiva licencia municipal y construida en suelo no urbanizable protegido. De hecho, el acto administrativo que ordenaba la demolición fue dictado por Resolución del Director General de Evaluación

Ambiental y Territorial de 5 de abril de 2012, siendo recurrida esta mediante recurso de alzada, que fue desestimado el 2 de octubre de 2012.

Las alegaciones del recurrente son desestimadas por el Tribunal; en el FJ 8.º de la Sentencia se destaca el carácter inexcusable para las administraciones públicas del ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística. Esta naturaleza de irrenunciable la vincula el Tribunal Superior de Justicia, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, con los nuevos planteamientos jurisprudenciales según los cuales la demolición en el caso de urbanismo ilegal, sobre todo en el caso de suelos especialmente protegidos, no se considera como facultativa o excepcional —como tradicionalmente se venía observando en aras del principio de proporcionalidad que suponía la menor demolición—, sino que los valores ecológicos exigen precisamente el derribo y la imposibilidad de legalización. En este sentido, el Tribunal Supremo insiste en el hecho de que el suelo es un recurso natural, escaso y no renovable. Por todo ello, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestima el recurso contencioso-administrativo.

Por otro lado, también la Sentencia del TSJCV 2375/2015, de 5 de junio, se refiere a una resolución de la Conselleria por la que se ordena la restauración de la legalidad urbanística en relación con una obra y un vallado en suelo no urbanizable, que además es considerado zona húmeda, como se encarga de destacar el Tribunal Superior de Justicia.

El TSJCV realiza su fundamentación, que supone la desestimación íntegra del recurso contencioso presentado, poniendo en valor el carácter ambiental de la zona ilegalmente construida en relación con los planteamientos recientes del urbanismo, que buscan tener en cuenta las situaciones presentes y no las futuras a fin de evitar la especulación, y por ello se considera que la resolución que fija la restauración de la legalidad infringida es conforme a derecho. Asimismo, el TSJCV reitera las argumentaciones en cuanto a la idoneidad de la orden de demolición, fundamentada, como hemos señalado en la sentencia anterior, en las nuevas perspectivas del urbanismo y de la protección del medio ambiente, que se decantan por la prevalencia de este último.

La ubicación de la obra y del vallado presenta en este caso especiales connotaciones ambientales, ya que, además de hallarse en suelo rural, afecta a las denominadas “zonas húmedas”, reguladas en el ámbito de la Comunidad Valenciana en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, que establece legalmente —como se ha encargado de manifestar la

jurisprudencia— las medidas de protección de los terrenos calificados como “humedales” y exige que dichos terrenos se clasifiquen como “suelo no urbanizable sujeto a especial protección”.

**Sumari:** 1.Explotacions mineres. 2.Contaminació acústica. 3.Restauració de la legalitat.

Seguidament s'exposen les sentències més rellevants dictades pel Tribunal Superior de Justícia per ordre cronològic, i se n'assenyala la temàtica que s'hi tracta.

### **1. Explotacions mineres: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 1755/2015, de 15 d'abril**

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana resol el recurs contenciós administratiu presentat per l'empresa ARENAS SILICEAS NOSTRA SENYORA DEL PILAR (d'ara endavant, ASPISA, SL), en relació amb la desestimació per silenci negatiu per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge del recurs d'alçada interposat contra la denegació dictada per la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'aprovació definitiva del Pla Especial Miner al terme de Fanzara.

Quant a l'objecte del recurs i les seves pretensions, ens interessa destacar les pretensions vinculades amb la protecció del medi ambient. A tals efectes se sol·licita la "nul·litat o subsidiària anul·labilitat de l'Avaluació ambiental estratègica duta a terme el 23 de març de 2010 sobre el Pla Especial Miner esmentat".

La Comissió Territorial d'Urbanisme, en la denegació de l'aprovació definitiva, es basa en l'informe desfavorable de la Direcció General de Gestió del Medi Natural sobre l'EIA i el fet que el Pla Miner Especial afecta el PORN de la serra d'Espadán, ja que es troba dins de l'anomenada àrea natural de la zona d'influència (AN, ZI).

Doncs bé, el Tribunal Superior de Justícia en el FJ 3r, que aborda les qüestions que hem esmentat, destaca, en relació amb l'informe desfavorable de la DIA, que l'extracció d'àrids i terra o l'explotació de recursos naturals generen un greu problema ambiental. Per això, d'una banda, cal controlar les explotacions existents, i, de l'altra, el màxim control de les noves autoritzacions amb la finalitat que aquestes activitats compatibilitzin la conservació i millora de l'estat dels recursos naturals, els ecosistemes i les espècies que s'han de protegir. I, en conseqüència, s'han d'establir limitacions d'usos del sòl —com és l'extracció d'àrids— en funció dels valors ambientals que presenten les zones afectades per les activitats d'extracció. Això és així, de manera que no només cal tenir en compte si les extraccions afecten zones incloses en l'àmbit del parc natural, sinó també altres zones, amb un elevat valor forestal, com és l'àrea natural

de la zona d'influència i que és el supòsit d'aquest cas. No obstant això, malgrat les argumentacions anteriors i la necessitat de fer prevaler la protecció del medi natural, el Tribunal estima el recurs i considera que ha de declarar-se la nul·litat de l'article 67.2 del Decret 218/1997, pel qual s'aprova el PORN de la serra d'Espadán, en el qual es prohibeix específicament l'explotació minera en les zones d'amortiment del Parc de la serra d'Espadán, perquè tot i que cal prohibir les activitats mineres en la ZAI, i de l'AN, no hi ha cap motivació, ni justificació que avaluï aquesta prohibició, de manera que el Tribunal entén que estem davant d'una norma arbitrària que mereix la màxima sanció, això és, l'expulsió de l'ordenament jurídic.

Amb tot, en la seva anàlisi, el TSJCV destaca com, d'acord amb la nova normativa, es prohibeixen les activitats mineres en les àrees naturals i de regeneració del PORN, prohibició que afecta noves autoritzacions i no aquest cas en què l'empresa ASPISA té una concessió minera des de l'any 1987, la qual cosa, efectivament, no l'eximeix de disposar del corresponent informe favorable pel que fa a la necessitat de tenir la memòria d'explotació i el pla de restauració adequats, documents que manquen en el Pla, per la qual cosa el Tribunal solament estima parcialment la pretensió de nul·litat de l'EAE i l'Acord de la Comissió Territorial, en relació amb l'esmentat article 67.2 del Decret 218/1997, que és el que declara nul.

## **2. Contaminació acústica: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 1705/2015, de 17 d'abril**

En la Sentència 1795/2015, de 17 abril, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dilucida un cas —recurrent a la ciutat de València— sobre l'ús dels anomenats “casals fallers”, això és, associacions culturals, festives i lúdiques... que, a més de dur a terme l'activitat pròpia del seu objecte social, això és, activitats relacionades amb les festes de les falles, i, per tant, que haurien d'estar circumscrites als períodes de les falles, es converteixen en lloc habitual de trobada i d'oci, i provoquen consegüents molèsties als veïns, constantment.

Cal destacar que els sorolls ja es van considerar en la Llei valenciana 3/1989, de 2 de maig —derogada actualment per la disposició derogatòria única.2 de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la contaminació i qualitat ambiental— com un factor determinant que afectava el medi ambient, de manera que amb aquella norma es



pretenia regular la convivència harmònica amb un medi ambient adequat, i per això s'establia com a requisit, per dur a terme qualsevol activitat prevista en la llei, l'obtenció de la preceptiva llicència. En efecte, el medi ambient urbà té com un dels seus principals factors de contaminació el soroll, per això es fa necessària la intervenció dels poders públics, en aquest cas de l'Ajuntament, per limitar i condicionar-ne la producció.

El TSJCV, després de considerar que no concorre la causa d'inadmissió al·legada pel jutjat contenciós administratiu, analitza, en aquest cas, la inactivitat de l'Administració, que, malgrat les reiterades denúncies de les parts interessades, no du a terme les actuacions oportunes destinades a protegir la tranquil·litat del domicili que preveu l'article 18 CE. I destaca, en concret, jurisprudència anterior, com és la Sentència del TSJCV 1377/2008, de 18 de setembre, la qual segueix la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional, i que manifesta que "amb la falta de correcció dels sorolls no es protegeix un medi ambient adequat com imposa l'art. 45.1 de la CE".

### **3. Restauració de la legalitat urbanística: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 2368/2015, de 4 de juny i Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 2375/2015, de 5 de juny**

En aquest temps les Sentències del TSJCV relatives a la restauració de la legalitat han estat diverses. D'entre les quals, destacarem les següents:

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la Sentència 2368/2015, de 4 de juny, dirimeix el recurs contenciós administratiu presentat per la part demandant davant una ordre de restauració de la legalitat urbanística referida a un habitatge unifamiliar de fusta, que no disposava de la preceptiva llicència municipal, construït en sòl no urbanitzable protegit. De fet, l'acte administratiu que n'ordenava la demolició va ser dictat per la Resolució del director general d'Avaluació Ambiental i Territorial de 5 d'abril de 2012, la qual fou recorreguda mitjançant un recurs d'alçada, que va ser desestimat el 2 d'octubre de 2012.

Les al·legacions de la part recurrent són desestimades pel Tribunal, que en el \*FJ 8è destaca el caràcter inexcusable de les administracions públiques de l'exercici de la potestat de restabliment de la legalitat urbanística. Aquesta naturalesa d'irrenunciable la vincula el Tribunal Superior de Justícia, seguint la doctrina del Tribunal Suprem, amb

els nous plantejaments jurisprudencials segons els quals la demolició en el cas d'urbanisme il·legal, especialment en el cas de sòls especialment protegits, no es considera com a facultativa o excepcional —com tradicionalment s'observava, d'acord amb principi de proporcionalitat que suposava la menor demolició—, sinó que els valors ecològics exigeixen precisament l'enderrocament i la impossibilitat de legalització, ja que el mateix Tribunal Suprem insisteix, en aquest cas, que el sòl és un recurs natural, escàs i no renovable. Per tot això, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestima el recurs contenciós administratiu.

D'altra banda, també la Sentència del TSJCV 2375/2015, de 5 de juny, es refereix a una resolució de la Conselleria en la qual s'ordena la restauració de la legalitat urbanística en relació amb una obra i clos, en sòl no urbanitzable, que a més és considerat zona humida, com destaca el Tribunal Superior de Justícia.

El TSJCV fa la seva fonamentació, que suposa la desestimació íntegra del recurs contenciós presentat, i posa en valor el caràcter ambiental de la zona il·legalment construïda, en relació amb els plantejaments recents de l'urbanisme que pretenen tenir en compte les situacions presents i no les futures, per evitar l'especulació, i per això es considera que la resolució que estableix la restauració de la legalitat infringida és conforme a dret. Així mateix, el TSJCV reitera les argumentacions quant a la idoneïtat de l'ordre de demolició, fonamentada, com hem assenyalat en la sentència anterior, en les noves perspectives de l'urbanisme i de la protecció del medi ambient, que es decanten per la prevalença de l'últim.

La ubicació de l'obra i del clos presenta, en aquest cas, especials connotacions ambientals, ja que, a més de trobar-se en sòl rural, afecta les anomenades “zones humides”, regulades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana en la Llei 11/1994, de 27 de desembre, que determina, doncs, legalment —com s'ha encarregat de manifestar la jurisprudència— les mesures de protecció dels terrenys qualificats com a “aiguamolls” i que exigeix que aquests terrenys es classifiquin com a “sòl no urbanitzable subjecte a especial protecció”.